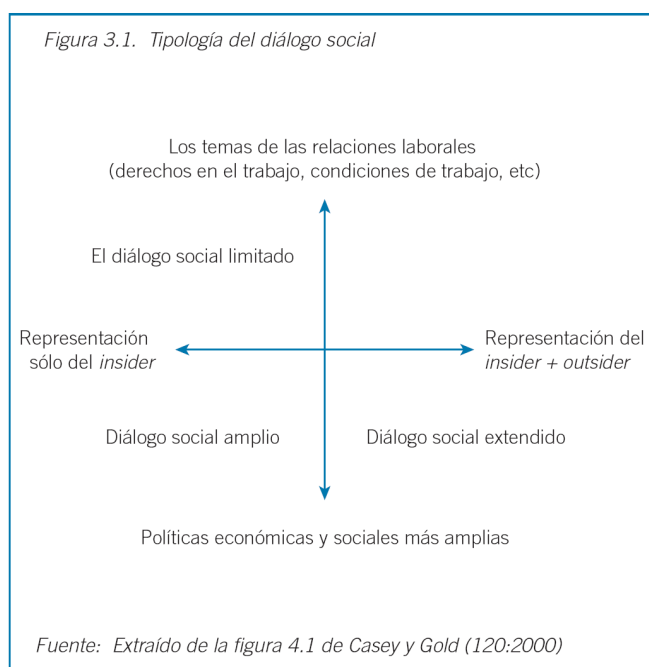


# LECCIÓN 19. OTROS INSTRUMENTOS CONVENCIONALES. EL DIÁLOGO SOCIAL

## I. DIÁLOGO SOCIAL, CONCERTACIÓN SOCIAL

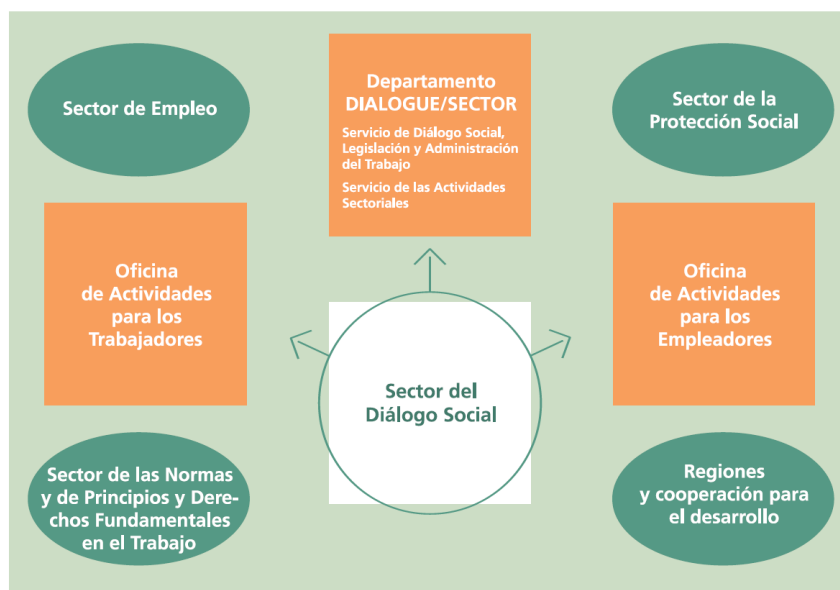
Según lo define la OIT, el diálogo social comprende todo tipo de negociaciones y consultas - e incluso el mero intercambio de información - entre representantes de los gobiernos, los empleadores y los trabajadores, sobre temas de interés común relativos a las políticas económicas y sociales. Con variantes según los países considerados, puede tratarse de un proceso tripartito, en el que el gobierno interviene como parte oficial en el diálogo, o bien consistir en relaciones bipartitas establecidas exclusivamente entre los trabajadores y las empresas -los sindicatos y las organizaciones de empleadores-, con o sin la participación indirecta del gobierno. El proceso de diálogo social puede ser informal o institucionalizado, y como ocurre a menudo, es una combinación de ambas categorías. Por otra parte, puede ser interprofesional, sectorial, o combinar ambas características (Cuadro 1).



**Cuadro 1**

El **principal objetivo** del diálogo social es la promoción del consenso y de la implicación democrática de los principales actores en el mundo del trabajo. Las estructuras y los procesos del diálogo social que resulten exitosos tienen la ventaja de solucionar importantes temas económicos y sociales, alentar el buen gobierno, mejorar la paz y la estabilidad social y laboral, así como de impulsar el progreso económico.

Ideas clave manejadas por la OIT son, sin duda, la cooperación y el tripartismo, debiendo resaltarse su revalorización actual en el seno de la propia organización, en particular a través de las acciones emprendidas en el seno del Departamento DIALOGUE/SECTOR (cuadro 2).



**Cuadro 2**

Prueba de este interés son las normas e instrumentos complementarios que han ido aprobándose sucesivamente, desde el Convenio 144, sobre la consulta tripartita, de 1976, y la Recomendación 152, hasta la *Resolución relativa al tripartismo y el diálogo social*, de 2002, pasando por el Convenio 154, sobre la negociación colectiva, de 1981, o las *Conclusiones de la Conferencia Internacional del Trabajo relativas a la cooperación tripartita en el plano nacional sobre políticas económicas y sociales*, de 1996.

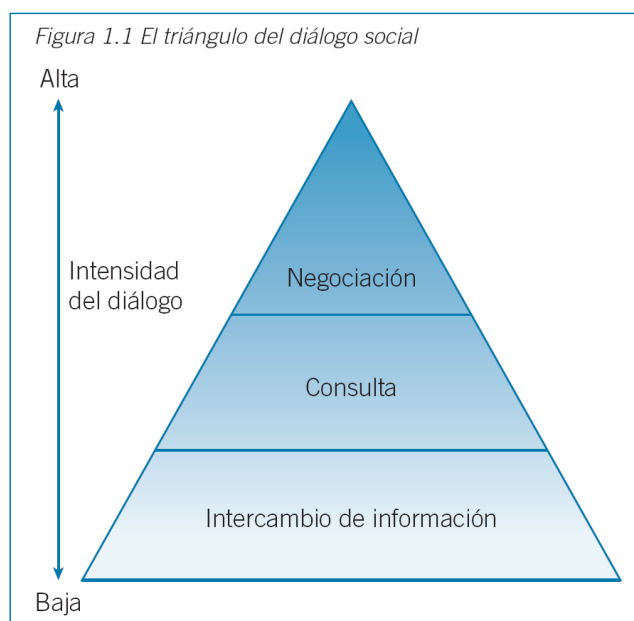
Para la OIT, las **condiciones que permiten el diálogo social** son las siguientes:

- a) La existencia de organizaciones de trabajadores y de empleadores sólidas e independientes, con la capacidad técnica y el acceso a la información necesarios para participar en el diálogo social.
- b) La voluntad política y el compromiso de todas las partes interesadas.
- c) El respeto de los derechos fundamentales de la libertad sindical y la negociación colectiva ya enunciados en los Convenios 87 y 98 OIT.
- d) Un apoyo o respaldo institucional adecuado.
- e) Un reconocimiento recíproco y un respeto mutuo entre cada representante de los interlocutores sociales.

La **concertación social** es una práctica de política social y económica, que ha sido adoptada en diversos países para afrontar importantes problemas nacionales o regionales de diversa índole, desde las dificultades derivadas de una crisis o depresión económica, hasta la forma de afrontar las consecuencias de una situación de bonanza o cualquier coyuntura específica que se haya planteado. Supone, fundamentalmente, un compromiso de los actores sociales, los cuales, sin renunciar a la defensa de sus específicos y contradictorios intereses, se obligan a adoptar un comportamiento

mantenido dentro de márgenes que hagan posible la realización de ciertas políticas adoptadas para lograr respuestas adecuadas a los requerimientos de la situación económica y social (HERNÁNDEZ ÁLVAREZ). Mediante la concertación se persigue que los actores sociales, en lugar de mantener actitudes de permanente y absoluta confrontación, logren ciertas áreas de consenso que suponen obtener, a mediano y a largo plazo, resultados ventajosos para ambas partes y para la sociedad en general.

En este sentido, las organizaciones representativas de los empleadores y de los trabajadores, a través de los consensos a los cuales llegan, pasan a desempeñar, junto con el Estado, el papel de participantes. Por ello los procesos de concertación social afectan necesariamente el ejercicio del poder público, pues suponen que la elección de opciones, que constitucionalmente corresponde al Estado, se sujeta a una negociación entre éste y los actores sociales, a fin de lograr un consenso, ya no de orden parlamentario, sino político-social, mediante el cual los poderes públicos persiguen que “los interlocutores sociales les apoyen y auxilien en sus propósitos de política económica, confiando en el poder y fuerza organizativa de éstos para suplir su propia carencia de poder y legitimidad” (RODRÍGUEZ PIÑERO).



**Cuadro 3**

Más allá de las posibles diferencias terminológicas y de la existencia de fórmulas próximas -consulta, negociación, etc. (*vid.* cuadro 3)-, interesa destacar que el diálogo social, la concertación social, constituyen **fórmulas de participación en las políticas públicas**. De este modo, la concertación social se configura como un proceso de intercambio político entre los poderes públicos y la autonomía colectiva -esto es, organizaciones sindicales y empresariales representativas-, orientado a proporcionar una respuesta de gobierno a las grandes cuestiones de política económica y social. Entendida, así, como presupuesto oportuno en dichos casos de la legitimación parlamentaria de las medidas adoptadas -acuerdos sociales, legislación negociada-, ha llegado a convertirse, durante la reciente historia democrática, en un elemento definitorio más del sistema social español, habiendo estado presente como método de

acción política durante estos años, con arreglo a versiones técnicas diversas, en buena parte de las grandes transformaciones institucionales llevadas a cabo en el ámbito de la economía y de las relaciones laborales (PALOMEQUE LÓPEZ).

## II. LA CONCERTACIÓN SOCIAL EN ESPAÑA: PRINCIPALES ETAPAS

A partir de la promulgación de la Constitución en 1978, la concertación social y sus manifestaciones -acuerdos sociales, legislación negociada- aparecen como un elemento definitorio del sistema español de relaciones laborales, hallándose presente como método de acción política a lo largo de estos treinta años, de acuerdo con técnicas heterogéneas y posibilitando, en parte, las transformaciones institucionales operadas en la economía y en el mercado de trabajo (PALOMEQUE LÓPEZ).

Varios son los **ciclos políticos** que la concertación social ha atravesado, habiéndose elaborado destacados documentos de impulso institucional y suscrito numerosos acuerdos sociales, de los que siempre han sido parte los sindicatos más representativos CC OO y UGT y que han dado origen a otras tantas reformas del ordenamiento jurídico laboral y de protección social (DE LA VILLA GIL).

A grandes rasgos, las **etapas** por las que ha atravesado la concertación social en España desde aquella fecha podrían sistematizarse así, de manera esquemática:

- 1) la concertación social de la transición democrática y de la primera crisis económica de la democracia (1977-1986);
- 2) la neoconcertación social (1990-1991);
- 3) la tercera concertación social, de la crisis económica de los noventa y la convergencia europea como telón de fondo (1993-1995);
- 4) la cuarta concertación social, de la reforma laboral pactada (1996-1998);
- 5) la fractura de la concertación social (2000-2003);
- 6) la recuperación del diálogo social (2004-2008);
- y 7) a la espera de una nueva concertación social de la crisis económica (2009).

Como puede observarse, un examen retrospectivo muestra la existencia de fases de desencuentro junto a periodos marcados por resultados notables. Entre éstos habría que destacar, en los últimos años, los diversos Acuerdos Interconfederales sobre negociación colectiva, los pactos en materia de formación profesional y en materia de protección social, como el Acuerdo sobre medidas en materia de Seguridad Social, de 13 de julio de 2006, precedente inmediato y origen de la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social.

Después de numerosas vicisitudes, a comienzos de 2010 se firmó el *Acuerdo para el empleo y la negociación colectiva*. Como ya se indicó en la Lección 16, se trata de un acuerdo interconfederal organizado en tres capítulos y suscrito el 9 de febrero de 2010, de una parte por CEOE y CEPYME y de otra por CC.OO. y UGT<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Con vigencia durante el periodo 2010-2012, su Disposición adicional única incluye el compromiso de las organizaciones pactantes para iniciar, a partir de la firma del Acuerdo y durante un

Normativamente, cabe destacar la promulgación del RD 1854/2009, de 4 de diciembre, por el que se crea, integrándolo en la estructura del Ministerio de Trabajo e Inmigración con el rango de Secretaría General, el Gabinete para el Diálogo Social. Su finalidad es “asistir y apoyar al Ministro en el desarrollo del diálogo social y ejercer las funciones que el mismo encomiende a su titular en relación con el impulso, coordinación y seguimiento del diálogo social y con el mantenimiento de la interlocución con los agentes sociales asociada al mismo”. Esta iniciativa nos sirve para abordar el tema de la institucionalización del diálogo social.

### **III. LA INSTITUCIONALIZACIÓN DEL DIÁLOGO SOCIAL**

Sobre los conocidos antecedentes de la Constitución de Weimar, cuyo art. 165 creaba un Consejo Social, aparece como fórmula de gran predicamento a partir de las dos oleadas constitucionales de las dos posguerras mundiales. Su presencia es detectable en numerosos países y en algunas instituciones supranacionales (Comités consultivos en la UE, Foro Consultivo Económico y Social del Mercosur).

Por lo que se refiere al plano nacional, pueden enunciarse, siempre con matices, ciertas características comunes:

- a) No se constituyen como Cámaras legislativas paralelas de corte operativo, pues carecen de facultades legislativas y decisorias, aunque en algún caso participan en la planificación económica o poseen cierta iniciativa legislativa.
- b) Su naturaleza es la de órganos consultivos, fundamentalmente del Gobierno y, accesoriamente, de los Parlamentos, en materia socioeconómica.
- c) A la vez, constituyen un foro permanente para el diálogo social entre representantes de intereses sociales y económicos.

En Europa Occidental, la expansión de estos organismos se ha realizado desde dos planos distintos:

- a) Mediante su incorporación en los textos constitucionales. Así, estos Consejos se configuran como órganos de relevancia constitucional. Es el caso de la Constitución francesa de 1958, italiana de 1947, portuguesa de 1976 y española de 1978.
- b) Mediante su creación por la legislación ordinaria. Son los casos de Austria, Bélgica, Dinamarca, Holanda, Luxemburgo e Irlanda. Caso singular es el

---

periodo de seis meses, una negociación bipartita sobre diversas materias, como la reforma de la negociación colectiva, el Acuerdo para la Mejora del Crecimiento y el Empleo suscrito el 9 de mayo de 2006, las materias remitidas al diálogo social por la Ley 27/2009, de 30 de diciembre, de medidas urgentes para el mantenimiento y el fomento del empleo y la protección de las personas desempleadas, flexibilidad interna y externa de las empresas, expedientes de regulación de empleo y de reducción temporal de la jornada, contratación, tiempo parcial, subcontratación, absentismo, incapacidad temporal y Mutuas.

Tales compromisos “se entienden sin perjuicio de la facultad del Gobierno de abrir una negociación tripartita sobre estas u otras materias y la posición de cada parte en las mismas, a excepción de la reforma de la negociación colectiva respecto a la cual las partes reafirman su carácter de negociación bipartita”.

británico, que cuenta con un órgano de gran relevancia pero carente de cobertura normativa, el *National Economic Development Council* (NEDC).

Sabido es cómo, en España, la **Constitución de 1978** previó un Consejo Económico y Social en su art. 131.2, órgano al que deben añadirse los distintos Consejos autonómicos. Con una tardía articulación -Ley 21/1991, de 17 de junio-, se trata de un órgano de naturaleza consultiva y estudio, actuando también como plataforma institucional permanente de diálogo y deliberación (<http://www.ces.es>).

La Ley 21/1991 define en su art. 1 al **Consejo Económico y Social** (CES) como órgano consultivo del Gobierno en materia socioeconómica y laboral, adscrito al Ministerio de Trabajo e Inmigración, con personalidad jurídica propia y autonomía orgánica y funcional para el cumplimiento de sus fines. Está integrado por 61 miembros cuyo mandato es de cuatro años renovable distribuidos en tres Grupos de 20, además del presidente: los Grupos I y II los integran, respectivamente, representantes de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas<sup>2</sup> y el III, de varios sectores (agrario, marítimo-pesquero, consumidores y usuarios, economía social)<sup>3</sup> y 6 expertos (art. 2).

Sus **principales funciones** -art. 7 de la Ley 21/1991- son, en primer lugar, la emisión de dictamen, con carácter preceptivo, sobre anteproyectos de leyes que regulen materias socioeconómicas y laborales y proyectos de RR.DD. que se considere por el Gobierno que tienen una especial trascendencia en la regulación de las indicadas materias, con excepción del anteproyecto de LPGE; en segundo término, emitir dictamen en los asuntos que, con carácter facultativo, le someta a consulta el Gobierno; finalmente, elaborar estudios o informes relacionados con muy diversas materias (agricultura, asuntos sociales, comunicaciones, consumo, cooperación para el desarrollo, desarrollo regional, economía, educación, empleo, energía, fiscalidad, industria, medio ambiente, mercado único europeo, pesca, relaciones laborales, salud, Seguridad Social, transportes y vivienda), así como elaborar y elevar anualmente al Gobierno una memoria en la que se expongan sus consideraciones sobre la situación socioeconómica y laboral.

En general, las CC.AA. han regulado sus respectivos Consejos Económicos y Sociales siguiendo el esquema funcional y orgánico del CES estatal. En algunas CC.AA., con los CES coexisten otros Consejos -«de Relaciones Laborales»- que sirven de segundo foro participativo para patronales y sindicatos<sup>4</sup>.

Desde la página *web* del CES estatal, puede enlazarse con las páginas del resto de CES autonómicos (<http://www.ces.es/cesespa/inicio.htm>), sitio *web* de carácter

---

<sup>2</sup> CEOE, CEPYME, UGT, CC.OO., CIG y ELA-STV.

<sup>3</sup> ASAJA (Asociación Agraria Jóvenes Agricultores), COAG (Coordinadora de Organizaciones Agricultores y Ganaderos), UPA (Unión de Pequeños Agricultores), Cooperativa de Armadores del Puerto de Vigo, Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, ONPROA (Organización Nacional de Productores de Ostra y Almeja), CEACCU (Confederación Española de Organizaciones de Amas de casa, Consumidores y Usuarios), HISPACCOOP (Confederación Española de Cooperativas de Consumidores y Usuarios), OCU (Organización de Consumidores y Usuarios), UCE (Unión de Consumidores de España), CEPES (Confederación Empresarial Española de la Economía Social).

<sup>4</sup> Véase, recientemente, J. CALVO GALLEGOS, «Leyes de participación institucional y Consejos de Relaciones Laborales en el actual mapa autonómico», *Temas Laborales* nº 100, 2009

conjunto que ofrece información sobre su composición, funciones, organizaciones representadas y sus actividades; acceso a sus Dictámenes, Informes, Memorias y otras publicaciones; espacio de información sobre la participación y el diálogo social en diferentes ámbitos; enlaces seleccionados a los sitios *web* de interés documental e información general<sup>5</sup>.

## IV. LA EXPERIENCIA CASTELLANO-LEONESA

### A) El Consejo Económico y Social

En el caso de la Comunidad Autónoma castellano-leonesa, desde 1991 viene funcionando un Consejo Económico y Social propio, configurado como un órgano colegiado de carácter consultivo, con funciones de asesoramiento y colaboración en materia socioeconómica en la Comunidad Autónoma. Se trata de un foro permanente y estable de participación y diálogo de los agentes económicos y sociales en la toma de decisiones de la política económica y sociolaboral (<http://www.cescyl.es/>). A efectos de conseguir los fines y objetivos buscados con su creación, se ha optado por una composición heterogénea, contando con representantes de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas de la Comunidad, así como con representantes de las organizaciones profesionales agrarias, asociaciones o federaciones de asociaciones de consumidores, cooperativas y sociedades laborales así como expertos designados por la Junta de Castilla y León.

El **Consejo Económico y Social de Castilla y León (CESCyL)** fue creado por **Ley 13/ 1990, de 28 de noviembre**, para el cumplimiento de la función constitucional de facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, social y cultural, reafirmando así, el desarrollo del Estado Social y Democrático de Derecho. Tal y como se recoge en la Exposición de Motivos de su Ley creadora, el CESCyL responde a la aspiración del establecimiento de un marco estable y permanente de comunicación y diálogo, tanto de las organizaciones empresariales y sindicales entre sí, como de éstas, con la Administración Autónoma castellano-leonesa, logrando así hacer más fluida su relación y colaboración mutua. Su Reglamento de organización y funcionamiento interno fue aprobado por Decreto 2/1992, de 16 de enero.

Se trata de un órgano colegiado de carácter consultivo, con funciones de asesoramiento y colaboración en materia socioeconómica dentro de la Comunidad Autónoma. Se configura como una institución de derecho público, con personalidad jurídica propia e independiente respecto de los órganos de la Comunidad y como órgano permanente de comunicación entre los distintos intereses económicos y sociales de la Comunidad y de asesoramiento y diálogo entre éstos y la Administración Autónoma.

A partir de una estructura compleja, en la que se combinan órganos unipersonales y órganos colegiados, (*vid.* cuadro 4), el CESCyL está compuesto por 36 miembros, distribuidos de la siguiente forma:

---

<sup>5</sup> Al listado de órganos, direcciones y enlaces a los mismos puede accederse desde la dirección que acaba de sugerirse: <http://www.ces.es/cesespa/miembros.htm>.

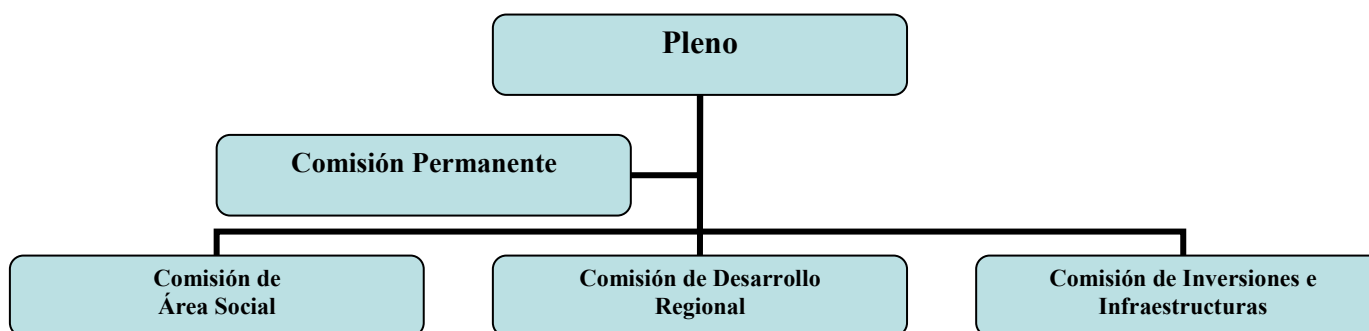
a) Doce representantes de las organizaciones sindicales más representativas de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, designados por éstas en los términos que establezcan las normas que sean de aplicación.

b) Doce representantes de las organizaciones empresariales más representativas de ámbito territorial en toda la Comunidad Autónoma, de acuerdo con la representación institucional que ostenten.

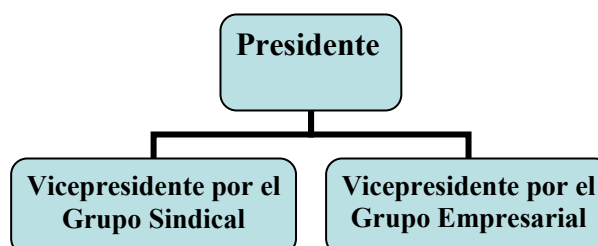
c) Doce miembros distribuidos y designados de la siguiente forma:

- Seis expertos designados por la Junta de Castilla y León.
- Cuatro representantes de las organizaciones profesionales agrarias de ámbito regional, designados por ellas mismas.
- Un representante de las asociaciones o federaciones de asociaciones de consumidores de ámbito regional, designados por ellas mismas.
- Un representante de las cooperativas y sociedades anónimas laborales designado por sus organizaciones de ámbito regional.

### Órganos colegiados del CES



### Órganos unipersonales



**Cuadro 4 (Estructura del CESCYL)**

El CESCYL desempeña, de acuerdo con lo previsto en la Ley 13/ 1990, las siguientes funciones:



- Informar con carácter previo a su tramitación, los proyectos de Ley y de Decreto relacionados con la política socioeconómica de la Comunidad Autónoma que, preceptivamente deberán ser sometidos a su consideración.

- Conocer el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma. A tal efecto, la Junta de Castilla y León remitirá al Consejo Económico y Social, su texto y demás documentos que al mismo se acompañen, simultáneamente a su envío a las Cortes Generales.

- Formular propuestas a la Junta de Castilla y León sobre materias de la competencia de este Consejo.

- Elaborar dictámenes e informes en cualquier clase de asuntos de carácter socioeconómicos. Por iniciativa propia, a petición de los Organos de la Administración de la Comunidad Autónoma o de las Cortes de Castilla y León, previo acuerdo de sus Comisiones.

- Servir de cauce de participación y diálogo permanente entre los interlocutores sociales en el debate de los asuntos socioeconómicos.

- Participar con su asesoramiento y colaboración, en el desarrollo y planificación de la actividad económica del sector público de la Comunidad Autónoma que la Junta de Castilla y León elabore.

- Canalizar demandas y propuestas de carácter socioeconómico, procedentes de asociaciones e instituciones con actividad económica y social en el ámbito de la Comunidad Autónoma con representación en el Consejo.

- Emitir anualmente, dentro del primer semestre de cada año, un informe sobre la situación general socioeconómica de la Comunidad. Dicho informe será remitido a la Junta de Castilla y León y a las Cortes Regionales.

- Formular recomendaciones y propuestas en relación con situaciones coyunturales de sectores económicos y sociales determinados, a las Instituciones Básicas de la Comunidad Autónoma.

## **B) El Consejo del Diálogo Social y la participación institucional,**

En el *Informe sobre la situación económica y social de Castilla y León en 2008*, aprobado por el Pleno del CES en su reunión de 26 de junio de 2009 (<http://www.cescyl.es/pdf/informes/siteys/Tomo1.pdf>), se pone de manifiesto cómo nuestra Comunidad Autónoma, ha de ser destacada como pionera a este respecto. En efecto, con la promulgación de la **Ley 8/2008, de 16 de octubre, para la creación del Consejo del Diálogo Social y Regulación de la Participación Institucional**, se procede a la institucionalización y formalización definitivas del diálogo social en Castilla y León, que es definido en su art. 1.2 como “el proceso de negociación y concertación en materias económicas y sociales, así como en otras de interés general, desarrollado entre la Junta de Castilla y León y los sindicatos y las organizaciones empresariales más representativos de la Comunidad Autónoma”.

Esta norma se presenta, así y por ahora, como el último paso de un largo camino iniciado con la firma el 9 de noviembre de 2001 del *Acuerdo para el impulso del Diálogo Social en Castilla y León*, suscrito por la Junta de Castilla y León y por los agentes económicos y sociales más representativos de la Comunidad (CECALE, CCOO y UGT). De este modo, el diálogo social en Castilla y León se caracterizó desde sus inicios por su naturaleza tripartita, al intervenir en el mismo la Junta de Castilla y León y los agentes económicos y sociales más representativos. El citado Acuerdo favoreció

el desarrollo de un proceso abierto y permanente de diálogo social desde el año 2001 hasta la actualidad, que se fue definiendo en acuerdos concretos sobre materias de interés social y económico, entre las que se puede destacar empleo, formación, salud laboral, inmigración o dependencia y de los que se han derivado importantes beneficios para la ciudadanía castellana y leonesa, tal y como subraya el *Informe* del CES.

Entre dichos pactos firmados, cabe destacarlos siguientes:

- El *Acuerdo de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres y Conciliación de la Vida Familiar y Laboral 2004-2007*, firmado el 13 de febrero de 2004.
- El *Acuerdo sobre Integración Social y Laboral y de Acceso al Empleo de la Población Inmigrante en Castilla y León para el periodo 2006-2009*, firmado el 22 de mayo de 2006, finalizada la vigencia de el anterior acuerdo para el periodo 2003-2005.
- El *Acuerdo sobre el IV Plan Regional de Empleo 2007-2010*, firmado el 26 de enero de 2007, que sustituye al III Plan Regional de Empleo 2004-2006.
- El *Acuerdo de Prevención de Riesgos Laborales en Castilla y León 2007-2010* (firmado el 26 de enero de 2007) que da continuidad a una serie de actuaciones contempladas en los acuerdos firmados el 5 de noviembre de 2002 y el 2 de febrero de 2005.
- El *Acuerdo sobre el II Plan de Formación Profesional 2007-2010* (también firmado el 26 de enero de 2007).
- En la misma fecha se firmó el *Acuerdo sobre el desarrollo del Diálogo Social en materia de Transporte y Logística en Castilla y León*.
- Asimismo el 26 de enero de 2007 se firmaron las *Acciones en materia de política forestal desde la perspectiva del empleo y asentamiento poblacional y sostenimiento medioambiental en la empresa*.
- El *Acuerdo para la elaboración del Anteproyecto de Ley de Servicios Sociales y Atención a la Dependencia de Castilla y León y sus normas de desarrollo*, firmado el 21 de marzo de 2007.

Este progresivo proceso de reconocimiento del valor del diálogo social como factor vertebrador de la sociedad castellana y leonesa encontró su culminación en la reforma por **Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre, del Estatuto de Autonomía de Castilla y León**. En efecto, el art. 16.4 recogió, entre los principios rectores de las políticas públicas de Castilla y León, “el fomento del diálogo social como factor de cohesión social y progreso económico, reconociendo el papel de los sindicatos y organizaciones empresariales como representantes de los intereses económicos y sociales que les son propios, a través de los marcos institucionales de encuentro entre la Junta de Castilla y León y dichos agentes sociales” y estableciendo que, a tal fin, “podrá regularse un Consejo del Diálogo Social en Castilla y León”.

El 7 de febrero de 2008 el Presidente de la Junta de Castilla y León, el Secretario General de la Unión Sindical de Comisiones Obreras de Castilla y León (CCOO), el Presidente de la Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León (CECALE) y el Secretario General de la Unión Regional de la Unión General de Trabajadores de Castilla y León (UGT) firmaron un *Acuerdo sobre creación del Consejo del Diálogo Social y Regulación de la Participación Institucional en Castilla y León*, en la línea de lo establecido en el citado art. 16.4 del reformado Estatuto de

Autonomía. Dicho Acuerdo se acompaña de un documento de *Bases para la Creación del Consejo del Diálogo Social y Regulación de la Participación Institucional*, que constituye el origen de la Ley 8/2008.

La Ley 8 2008, de 16 de octubre, para la creación del Consejo del Diálogo Social y Regulación de la Participación Institucional, viene, así, a establecer en su art. 1.1 esta figura como máximo órgano de encuentro y participación institucional de los agentes económicos y sociales y la Junta de Castilla y León, constituyéndose formalmente este órgano el 28 de noviembre de 2008. Además de la propia definición, ya expuesta, y a los efectos de la Ley de Diálogo Social, su Título I define, asimismo, las competencias del Consejo, su composición, los órganos con los que cuenta (que son el Consejo, el Presidente, la Comisión Permanente y las Comisiones Especializadas y las Comisiones Negociadoras) y su funcionamiento, así como los medios técnicos del propio Consejo.

Tal y como ya expresó el CES en su Informe Previo 2/2008 sobre el Anteproyecto de Ley de Creación del Consejo del Diálogo Social y regulación de la participación institucional, *“nuestra Comunidad Autónoma se convierte así en pionera en esta materia. El reconocimiento en nuestro Estatuto de Autonomía del diálogo social, y la institucionalización que del mismo supone la creación del Consejo del Diálogo Social, constituye un verdadero impulso al principio de la democracia participativa que en las sociedades más modernas está llamado a jugar un papel cada vez más importante, complementando a la democracia representativa”*.

El Título II de esta Ley trata una materia distinta, que es la regulación del marco de la participación institucional de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas de Castilla y León en la Administración de nuestra Comunidad, recogiendo el ámbito de aplicación de dicha participación, los criterios que la presiden, su contenido, y el fomento y financiación de la misma, entre otras cuestiones. Su art. 11.2 define la participación como “el ejercicio de tareas y actividades de promoción y defensa, en el seno de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, de los intereses que les son propios a las organizaciones sindicales y empresariales más representativas”, de acuerdo con lo previsto por los arts. 6 y 7.1 LOLS y por la DA 6ª ET.

En el Acuerdo citado de 7 de febrero de 2008 y con el fin de evitar la paralización del Diálogo Social hasta la entrada en vigor de la Ley del Consejo del Diálogo Social y Regulación de la Participación Institucional, se contempló la iniciación de la negociación de diálogo social sobre las siguientes materias:

- Calidad en la contratación de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.
- Simplificación administrativa.
- Cohesión territorial e infraestructuras.
- Empleo rural.
- Vivienda.
- Cohesión social y nuevos derechos sociales.
- Dependencia y servicios sociales.
- Acceso universal a las nuevas tecnologías y transferencia del conocimiento.

Durante el año 2008 se han puesto en marchas mesas relativas a dichas materias, con diversas reuniones que han tenido lugar a lo largo de todo el año. El 25 de julio tuvo lugar la firma de la puesta en marcha de la *Comisión de Seguimiento sobre el Plan Regional Sectorial de Carreteras 2008-2020*.